

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

VOLUMEN 18 • NÚMERO 4
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

El gobierno del bicentenario en Costa Rica

Cita recomendada:

Díaz González, José Andrés, (2018) “El gobierno del bicentenario en Costa Rica”, *Foreign Affairs Latinoamérica*, Vol. 18: Núm. 4, pp. xx-xx. Disponible en: www.fal.itam.mx

El gobierno del bicentenario en Costa Rica

De elecciones complejas a régimen complicado

✎ *José Andrés Díaz González*

En octubre de 2017, cuando inició la campaña electoral en Costa Rica, nadie hubiera previsto que el balotaje para elegir al presidente sería entre Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Restauración Nacional (PRN), y Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y menos aún que este último iba a ganar. Alvarado Quesada tenía en su contra los efectos del llamado “cementazo”, un caso de corrupción relacionado con el otorgamiento de préstamos irregulares por parte de bancos públicos para la importación de cemento desde China. En el caso se vieron envueltas figuras de diversos partidos, pero especialmente del PAC, e incluso se cuestionó la participación del propio presidente saliente, Luis Guillermo Solís Rivera. Por eso, se pensaba que Alvarado Quesada pagaría la factura política (a pesar de no estar mezclado en el escándalo) y que no tendría posibilidades reales de alcanzar la presidencia.

LA “ATÍPICA” CAMPAÑA ELECTORAL

Al inicio de la campaña electoral, la intención de voto de Alvarado Quesada y Alvarado Muñoz estaba muy detrás de los otros contrincantes, según distintos estudios de opinión realizados por centros de investigación de universidades públicas y por encuestadoras privadas. Además, los estudios coincidían en que no había un claro favorito para ganar las elecciones y, por lo tanto, una segunda ronda electoral parecía inminente.

JOSÉ ANDRÉS DÍAZ GONZÁLEZ es doctorando en Gobierno y Políticas Públicas, maestro en Historia y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es académico del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional y profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. Sígallo en Twitter en @jadg_cr.

A diversos observadores puede parecerles atípico el desarrollo y resultado de ese proceso electoral costarricense. Pero si se mira con atención, no es más que la consecuencia de un proceso político que se remonta a la década de 1990 y que ha ocasionado un electorado volátil, con poca o nula lealtad partidaria, gran desencanto de la política (y más precisamente de la élite política), un sistema de partidos políticos cada vez más fragmentados, con agrupaciones incapaces de generar una base partidaria sólida y sin una conexión fuerte con los grupos sociales que les permita hacer propuestas atractivas para la población.

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, los resultados de las elecciones no son extraños para Costa Rica, ya que se presentó una situación similar en las elecciones de 2014, cuando Solís Rivera, también del PAC, pasó de estar bajo los márgenes de error de las encuestas electorales, a ganar en la segunda ronda a Johnny Araya Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), la agrupación política de mayor trayectoria y que más veces ha ejercido el poder ejecutivo desde 1953.

En octubre de 2017, Antonio Álvarez Desanti, del PLN, encabezaba la intención de voto, pero muy por debajo del 40% requerido para obtener la presidencia en la

*Parte del triunfo
de Alvarado Quesada
en la segunda ronda
pudo deberse a errores
de estrategia de
Alvarado Muñoz.*

primera ronda electoral. Era seguido por Juan Diego Castro Fernández, del Partido Integración Nacional (PIN), un candidato de mano dura que se presentaba como independiente, a pesar de haber sido Ministro de Seguridad y Ministro de Justicia en el gobierno del PLN de 1994 a 1998, y que esgrimía un discurso populista. En tercer lugar se encontraba Rodolfo Piza Rocafort, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), una agrupación política que, junto con el PLN, consolidó el sistema bipartidista que estuvo vigente en Costa Rica en las décadas de 1980 y 1990, pero que perdió mucho de su apoyo popu-

lar a inicios del siglo XXI debido a sonados casos de corrupción en los que se vieron involucrados los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, ambos del PUSC.

Para diciembre de 2017, las encuestas mostraban un empate entre Castro Fernández y Álvarez Desanti en el primer lugar de la intención de votos, y diversos analistas daban por hecho una segunda ronda entre ambos candidatos. Pero el 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo, a raíz de una consulta realizada por el gobierno de Costa Rica, en el que ordenaba al país avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBTTTI) y en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este dictamen generó una ola de malestar entre el sector más conservador de la sociedad costarricense que fue aprovechada por Alvarado Muñoz, quien se convirtió en uno de los principales voceros opositores a la resolución de la Corte IDH y llegó al extremo de asegurar que, de ganar la presidencia, sacaría

al país de este ente y denunciaría el Pacto de San José. Para mediados de enero de 2018, las encuestas ponían a Alvarado Muñoz a la cabeza de las preferencias electorales, pero muy por debajo del 40% necesario para ganar en la primera ronda.

Si el crecimiento electoral de Alvarado Muñoz fue una reacción a la resolución de la Corte IDH, el de Alvarado Quesada parece haber sido una respuesta al crecimiento del PRN. Las mediciones de intención de voto realizadas a finales de enero de 2018 mostraban un aumento del apoyo al candidato del PAC, aunque sin perfilar con certeza que fuera suficiente para llegar a la segunda ronda electoral. Sin embargo, el PAC suele obtener un porcentaje de votos mayor del que proyectan las encuestas electorales, y de esta forma se benefició del llamado “voto silencioso”. Así, los resultados de la elección del 4 de febrero de 2018 arrojaron que los candidatos con mayor cantidad de votos, 25% y 22%, fueron Alvarado Muñoz y Alvarado Quesada.

El resultado de la segunda ronda electoral podría considerarse como sorpresivo, ya que no sigue la tendencia de los balotajes anteriores realizados en el país, en los cuales había resultado vencedor el candidato con mayor apoyo electoral en la primera ronda, acompañado de un importante aumento del abstencionismo. En cambio, Alvarado Quesada ganó con cerca del 60% de los votos emitidos, y el abstencionismo disminuyó casi en 1.5% respecto de la primera ronda electoral.

Parte del triunfo de Alvarado Quesada en la segunda ronda puede deberse a errores de estrategia de Alvarado Muñoz, que adoptó una posición de hermetismo ante la prensa nacional, se negó a participar en diversos debates y tuvo un mal desempeño en los que sí asistió. Además, se le debe sumar su nula capacidad de reacción ante escándalos y cuestionamientos sobre el uso de los fondos de su campaña, así como a las críticas a su escueto programa de gobierno y a su incapacidad de presentarse ante el electorado con una propuesta política que trascendiera su oposición a los derechos de la población LGTBTTI. También generó una fuerte controversia cuando se dio a conocer que la mayoría de los diputados elegidos del PRN eran pastores o estaban vinculados a iglesias evangélicas, tenían poca preparación académica y carecían de experiencia en cargos públicos.

Por su parte, la candidatura de Alvarado Quesada se fortaleció con el surgimiento de la Coalición Costa Rica, un grupo de la sociedad civil integrado principalmente por jóvenes. El grupo se constituyó por la falta de discusión en las campañas de los problemas fundamentales que afectaban al país, pero posteriormente respaldó al candidato del PAC.

Hay un tercer elemento clave que tiene que ver con el peso del voto evangélico y conservador en el electorado costarricense. Se quiso explicar el crecimiento del caudal electoral de Alvarado Muñoz como producto de un “giro conservador” y una “conmoción religiosa” que afectaba a la población; sin embargo, pasada la segunda ronda, se puede tratar de entender mejor el impacto de estos elementos en los comicios costarricenses.

EL PESO DEL VOTO EVANGÉLICO Y CONSERVADOR

Al igual que en otros países de Latinoamérica, en Costa Rica las iglesias evangélicas han crecido desde la década de 1980, a pesar del predominio histórico de la religión católica. Según datos del Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos, en 1983 cerca del 85% de la población costarricense se consideraba católica y solo un 8.6% formaba parte de una congregación evangélica o protestante. Para 2017, los que se declaraban católicos habían disminuido al 57% de la población, mientras que aumentó al 25% el porcentaje de los que asistían a iglesias evangélicas.

Este cambio en las creencias religiosas se manifiesta en la aparición de los “partidos evangélicos”. Estas agrupaciones surgieron en Costa Rica desde finales de la década de 1980, pero hasta 1998 el Partido Renovación Costarricense (PRC) no logró el apoyo electoral necesario para elegir un diputado en la Asamblea Legislativa. En 2002, Carlos Avendaño obtuvo una diputación, pero luego tuvo problemas con el líder del PRC, Justo Orozco, se separó de la agrupación y fundó el PRN. En lo sucesivo, estas dos agrupaciones han sido los principales partidos evangélicos del país.

En los siguientes procesos electorales, el PRC y el PRN llevaron a la Asamblea uno o dos diputados, mientras que en las elecciones presidenciales habían tenido muy

*Quizá la sociedad
costarricense no es tan
conservadora como se cree.*

escasa votación. Juntos, en 2002 consiguieron 1.2% de los votos para la presidencia, en 2006 obtuvieron el 1.08% y en 2010 menos del 1%. Para 2014, su caudal electoral sumaba el 2.26%. En las elecciones legislativas, los partidos evangélicos han tenido mejor desempeño: en 2002 obtuvieron el 3.59% de los votos, en 2006 el

5.5%, en 2010 el 6.04% y en 2014 el 8.75%. A pesar de que el caudal electoral de los partidos evangélicos ha mostrado una tendencia alcista en el siglo XXI, sus votos están muy por debajo del porcentaje de los costarricenses que se afilia a ese credo. Es posible argumentar que, si bien el surgimiento y consolidación de los partidos evangélicos parece ser parte del cambio de las creencias religiosas de la población, a estas agrupaciones no le resultan atractivas ni representativas.

Alvarado Muñoz reunió en la primera ronda casi un 25% de los votos, un porcentaje idéntico al segmento de la población que se declara evangélica. Dado esta coincidencia, es tentador afirmar que el PRN logró al fin posicionarse como una agrupación política atractiva para ese electorado. No obstante, es una afirmación problemática, si se observa que ciertos sectores evangélicos costarricenses repudiaron las declaraciones de Alvarado Muñoz en contra de los derechos de la población LGTBTTI. Al mismo tiempo, diversos grupos de ciudadanos católicos declararon su apoyo al PRN. Incluso la alta jerarquía de la Iglesia católica costarricense pareció adoptar tácitamente una posición favorable al candidato. Esta situación lleva a pensar que más que un tema de credo religioso, fue el conservadurismo el que dio su apoyo electoral en la primera ronda a Alvarado Muñoz.

Costa Rica es el último país de Latinoamérica que mantiene un Estado confesional católico. Históricamente, temas como la legalización del matrimonio entre

personas del mismo sexo y el aborto, incluido el terapéutico, que es legal en el país, han encontrado poco apoyo entre los costarricenses. Por eso, suele pensarse que la población tiende al conservadurismo. Un estudio de opinión pública realizado en noviembre de 2017 por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional mostró que un 31.6% de la población tenía una afinidad alta o muy alta por el conservadurismo. Así, podría plantearse que fue esta población conservadora, o al menos un segmento, la que se volcó a apoyar a Alvarado Muñoz en la primera ronda electoral.

No obstante, los datos anteriores revelan algo que parece contradecir la opinión común, y es que la sociedad costarricense posiblemente no es tan conservadora como se cree. Por ejemplo, en el mismo estudio se indica que el 43% de la población mostraba una tendencia baja o muy baja hacia el conservadurismo, mientras que un 25.4% tenía una posición moderada. Entonces, si bien los costarricenses marcadamente conservadores forman un segmento importante de la población, no están cerca de ser la tendencia dominante. Por lo tanto, no parece correcta la interpretación de que el crecimiento electoral del PRN se deba a un fortalecimiento del conservadurismo en Costa Rica.

Una segunda encuesta realizada por el Idespo, una semana después de la primera ronda electoral, arrojó que las personas que votaron por Alvarado Muñoz consideraron que el fallo de la Corte IDH fue lo que más influyó en su decisión. El resto de la población dijo que el desempeño de los candidatos en los debates, los planes de gobierno y las campañas realizadas fueron los aspectos más determinantes para decidir por quién votar.

Por lo tanto, para el grueso de la ciudadanía costarricense, la posición respecto de los derechos de la población LGTBTTI no parece ser un factor determinante para decidirse por un candidato para la presidencia. Estos datos apuntalan la idea de que, si bien hay un grupo de la población fuertemente conservadora, no es el grupo mayoritario. Incluso para las personas con cierta tendencia al conservadurismo, la oposición a los derechos de la población LGTBTTI no parece ser el punto más importante a la hora de definir cómo votar, al menos en la primera ronda.

Entonces, ¿cómo se explica que Alvarado Muñoz fuera el candidato con mayor apoyo en la primera ronda? Para dar la respuesta hay que poner los datos en perspectiva. Alvarado Muñoz obtuvo el 25% de los votos válidos, que equivalen al 16.35% de todo el padrón electoral. Nunca en la historia electoral costarricense el candidato ganador de la primera ronda había obtenido un apoyo tan bajo. En términos absolutos, recibió 538 504 votos, mientras que 748 688 costarricenses se abstuvieron de votar. En otras palabras, su apoyo electoral fue menor que el número de los abstencionistas. Así, se vio beneficiado por el descontento de la población con la política, la alta volatilidad del electorado y la fragmentación del sistema de partidos.

Con lo anterior no se quiere dar a entender que en Costa Rica no exista un grupo cuantioso de ciudadanos motivados por ideas conservadoras o que su apoyo no fuera significativo para el crecimiento electoral del PRN. Lo que se quiere dejar claro es que estos elementos no parecen suficientes para explicar los resultados de los comicios, y

que en realidad se deben a una suma de condiciones: fue importante para Alvarado Muñoz poder aglutinar a los sectores conservadores, pero este caudal tuvo efectos electorales debido a la dinámica y el fraccionamiento del electorado costarricense.

Un último punto que permite apreciar que el conservadurismo político no parece ser, al menos por el momento, el principal estímulo del electorado costarricense, es que Alvarado Muñoz consiguió el apoyo de muchos de los candidatos que participaron en la primera ronda: Álvarez Desanti (PLN), Castro Fernández (PIN), Rodolfo Hernández (Partido Republicano Social Cristiano), Otto Guevara (Movimiento Libertario), Sergio Mena (Partido Nueva Generación) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), entre otros. Sin embargo, la muestra pública de apoyo de estos candidatos, incluso su defensa de los “valores tradicionales”, tuvo un efecto limitado en el electorado que les había otorgado el voto en las elecciones primarias del 4 de febrero de 2018.

LA CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL

Al asumir la presidencia en mayo de 2014, Solís Rivera enarboló la bandera del “cambio” y despertó grandes expectativas, que luego su gobierno quedó lejos de cumplir. A pesar de haber ganado con holgura el balotaje de 2014, el PAC contaba con un caudal político limitado: en el Congreso tenía trece diputados, cinco menos que el PLN, lo que representó una situación de gobernabilidad complicada. A esto se deben sumar los constantes conflictos entre el poder ejecutivo y su propia bancada legislativa, el escándalo de corrupción del “cementazo” y otros yerros en las políticas públicas. Y si bien Solís Rivera pudo acrecentar su popularidad al final de su gestión, los resultados de su gobierno estuvieron muy por debajo de las expectativas iniciales del primer gobierno del PAC.

En cambio, Alvarado Quesada ha sido más moderado, cauto y pragmático en sus planteamientos. Parece más consciente que su predecesor del hecho de que posee un capital político limitado y que su bancada legislativa es aun menor que la del gobierno saliente, por lo que ha puesto énfasis en formar un gobierno de coalición, algo desacostumbrado en la política costarricense.

En Costa Rica no es inusual que las personas que ocupan la presidencia completen su gabinete con figuras de partidos políticos distintos, pero se les propone el cargo a título personal, sin suponer ningún compromiso para la agrupación política de la que proceden. En cambio, Alvarado Quesada ofreció a todos los partidos con representación en la Asamblea Legislativa repartir entre ellos la mitad de los puestos del gabinete, con la condición de que los cargos estuvieran sujetos al cumplimiento de una agenda legislativa acordada entre todos los partidos. Aunque diversas agrupaciones manifestaron su deseo de trabajar de manera constructiva con el nuevo gobierno, solamente el PUSC y el Frente Amplio aceptaron la propuesta. Esto hace que, en temas puntuales, el poder ejecutivo cuente con 20 votos en el Congreso, menos de los 29 votos que se requieren para las decisiones por mayoría simple y los 38 de las decisiones por mayoría calificada.

La constitución del gobierno de unidad nacional responde a una estrategia para hacer frente a los problemas de gobernabilidad y empantanamiento del legislativo que el país ha sufrido en las últimas décadas. Sin embargo, la han hecho inviable elementos como la falta de mecanismos formales para fomentar las coaliciones, la poca disposición de la élite política para negociar entre partidos y, posiblemente, los cálculos que algunos partidos estarían realizando a fin de recuperar el caudal electoral perdido para las elecciones de 2022.

En ese mismo tenor, Alvarado Quesada ha seguido la estrategia de presidentes anteriores y ha instalado la Comisión de Notables para que analicen y hagan recomendaciones en torno al tema de la reforma del Estado. Esta propuesta ha recibido críticas de dos tipos. El primero, que entre sus integrantes no se han incluido miembros de las universidades públicas y otros centros académicos del país, en los cuáles se han estudiado y elaborado propuestas. Segundo, entre las personas que designó Alvarado Quesada para la comisión está Kevin Casas Zamora, Vicepresidente de Costa Rica en el segundo gobierno de Óscar Arias Sánchez (de 2006 a 2010), cargo al que tuvo que renunciar al descubrirse que, junto con el diputado del PLN Fernando Sánchez Campos, redactó un documento, el “memorando del miedo”, en el que se delineaba una estrategia para que el gobierno destinara recursos públicos a incidir en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el cual estaba sometido a referendo. La designación de Casas Zamora causó indignación en diversos grupos, que la consideraron una táctica para limpiar su imagen ante una futura candidatura por parte del PLN.

A lo anterior se le debe sumar que, como parte de la negociación con el PUSC, Alvarado Quesada ha retirado o disminuido su apoyo a temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como, por ejemplo, el aborto terapéutico. Esta acción ha generado molestias y críticas entre sectores que le brindaron su apoyo en la primera y la segunda ronda.

CONTINUIDAD O CAMBIO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

Al momento de escribir estas líneas solo se tenían algunos atisbos de la estrategia de política exterior del gobierno de Alvarado Quesada. En primera instancia, causó algunas críticas el nombramiento de Epsy Campbell Barr, primera Vicepresidenta de Costa Rica, como Ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Campbell Barr es la primera mujer en la historia del país en ocupar el puesto de Canciller, además de ser la primera afrodescendiente en ser elegida Vicepresidenta. Las críticas a su nombramiento se deben a que no tiene experiencia en puestos diplomáticos, lo cual se ha tratado de desestimar resaltando su trabajo en organismos internacionales.

Una diferencia con respecto al gobierno de Solís Rivera es que el nuevo ha adoptado una posición más crítica del gobierno de Daniel Ortega y, en especial, de la crisis política y la violencia que afecta al pueblo nicaragüense. Así, por ejemplo, Campbell Barr ha denunciado en la Organización de los Estados Americanos la forma en que el gobierno de Ortega ha manejado el conflicto. Asimismo,

Alvarado Quesada ha expresado ante al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas su preocupación por la situación nicaragüense.

Una similitud del nuevo gobierno con el anterior es que ha manifestado el interés

Si el gobierno de Solís se puede calificar como decepcionante, la calificación a la que aspirará el gobierno de Alvarado Quesada será la misma.

en continuar con el trámite de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Grupos empresariales y sectores económicos han declarado su apoyo; por el contrario, otros sectores sociales no están conformes debido a los cambios que deben hacerse en educación, funcionamiento del Estado y otros. Parece que el gobierno de Alvarado

Quesada tiene la intención de utilizar la adhesión a la OCDE como estrategia para impulsar la reforma fiscal del país, que se viene discutiendo desde inicios del siglo XXI sin que se hayan hecho avances ni se haya llegado a acuerdos.

QUÉ ESPERAR DEL GOBIERNO DEL BICENTENARIO

El 15 de septiembre de 2021 Costa Rica celebrará sus 200 años de vida independiente. Por ello, el régimen de Alvarado Quesada ha asumido el título de “gobierno del bicentenario”, como una forma de proyectar que el país se encuentra en etapa de definiciones para un nuevo ciclo de vida independiente. Pero la gestión del gobierno del bicentenario se augura complicada. Con un apoyo político y una fuerza legislativa menor a la de su antecesor, el segundo gobierno del PAC tiene muy poca capacidad de maniobra para impulsar sus planes y políticas. Además, debe tratar de hacer frente a situaciones problemáticas o controversiales, como la crisis fiscal o el acatamiento del fallo de la Corte IDH sobre los derechos de la población LGTBTTI, que pueden desgastar a su gobierno e, incluso, debilitar las alianzas y apoyos que haya conseguido de diversos grupos políticos y sociales.

Si el gobierno de Solís Rivera se puede calificar, al menos, como decepcionante, la calificación a la que aspirará el gobierno de Alvarado Quesada parece ser la misma. Pero tal vez esta calificación sea la mejor que un gobierno pueda obtener con una sociedad cada vez más fragmentada, con problemas estructurales e institucionales que ha arrastrado por décadas y con una cultura política que si bien apoya la democracia, al mismo tiempo es proclive al autoritarismo y la intransigencia, lo cual dificulta el diálogo y la conformación de acuerdos. 